

DECLARACION DE LA UNIDAD POPULAR EN ROMA

Se ha realizado en Roma la reunión del Comité Político de la Unidad Popular. Asistieron a ella delegaciones del Partido Socialista, encabezada por su Secretario General Carlos Altamirano; del Partido Comunista, por su Secretario General Luis Corvalán; del Partido Radical, por su Vicepresidente Hugo Miranda; del Mapu Obrero y Campesino, por su Secretario General Jaime Gazmuri; de la Izquierda Cristiana, por su Encargado de la Rama Exterior Luis Maira; y del Mapu, por su Secretario Ejecutivo del Frente Externo Julio López, los que se reunieron bajo la presidencia de Clodomiro Almeyda, Secretario Ejecutivo de la Unidad Popular.

En el curso del debate para analizar la situación del país y las orientaciones generales del trabajo de la Unidad Popular, Carlos Altamirano informó acerca de la realización del Pleno del Comité Central del Partido Socialista. Todos los partidos aportaron antecedentes sobre su actividad en el interior del país y la situación en Chile.

Como resultado del intercambio de opiniones se resolvió emitir la siguiente declaración pública:

1977 ha sido un año de avances para las fuerzas antifascistas en todos los terrenos. La dictadura aún puede golpear, pero está en un pie forzado que la obliga a retroceder. Si bien ha conseguido superar sucesivas crisis, cada una es más profunda que la anterior y la deteriora progresivamente.

La acción común de todos los que están objetivamente afectados por el régimen es el camino para llevar adelante la gran tarea nacional liberadora: el derrocamiento de la dictadura fascista. Lograr este objetivo no es cosa fácil, pero es posible y constituye un deber patriótico y un imperativo nacional. Los avances logrados por la lucha social muestran el camino para alcanzar la victoria.

El plebiscito fraudulento

La llamada "consulta nacional" montada precipitadamente por Pinochet, constituyó un intento de respuesta ante la magnitud de su fracaso interno y del repudio internacional. Su finalidad fue invertir la tendencia al deterioro creciente de la dictadura.

Los resultados del fraude han quedado muy lejos de las aspiraciones de su gestor.

La convocatoria hizo aflorar de modo público la crisis del fascismo en las Fuerzas Armadas. Se hizo evidente el repudio al poder personal de Pinochet.

En los días de la consulta, a pesar de las dificultades de coordinación, las fuerzas que representan a la mayoría de los chilenos rompieron el receso político, elevaron sustancialmente el nivel de sus coincidencias, salieron a la calle a manifestar su repudio y a expresar su común voluntad de abrir paso a una salida democrática.

No obstante, Pinochet logró imponer su plebiscito e intentó aprovechar el fraude a su favor. Pero los problemas de fondo que quiso resolver siguen presentes y se agravan.

Su aislamiento internacional fue reiterado hace pocos días por la abrumadora condena que tuvo lugar en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Hoy, se intensifica el repudio mundial al conocerse los antecedentes que obran en poder de los tribunales de los EE.UU. sobre la responsabilidad de Pinochet en el asesinato de Orlando Letelier.

En Chile han bastado unas pocas semanas para que pase la euforia artificial del dictador y reaparezca la exigencia del país real de poner fin al actual estado de cosas. La relegación de doce dirigentes demócratacristianos ha debido ser anulada. 48 horas después de iniciado el cobro de la enseñanza media, tuvo que ser derogado. La dictadura ha debido poner fin al estado de sitio que mantuvo por cuatro años y medio. Aunque esta última decisión deja prácticamente intacta la estructura represiva del Estado fascista, es una prueba de la incapacidad de Pinochet para resistir la presión interna e internacional.

A redoblar los combates y afianzar la acción común

No puede ni debe persistir un régimen que atenta diariamente contra el derecho a vivir, a comer, a trabajar y a estudiar de millones de chilenos; que destruye sistemáticamente el potencial industrial del país; que subasta sus riquezas en beneficio del capital imperialista y que aísla y debilita a Chile, poniendo en riesgo su integridad y seguridad.

Son mayoría los que están convencidos de que hay que modificar los rumbos del país, que se movilizan en busca de una solución a la crisis. De este modo, se ha ido articulando un amplio movimiento social de renovación democrática.

En este movimiento son actores las organizaciones sindicales de la ciudad y del campo, que combaten por su derecho al trabajo, por terminar con los salarios de hambre, la cesantía y por imponer la derogación del decreto 198 que suprime las libertades sindicales. Se movilizan activamente las heroicas mujeres de los desaparecidos; la juventud, a la que el fascismo no logra dominar; lo mejor de la intelectualidad y los profesionales que ha podido permanecer en la Patria; los pobladores, las dueñas de casa, vastos sectores de capas medias y también grupos significativos de empresarios.

Son parte de este movimiento el millón de chilenos a quienes se niega el derecho a vivir en su propia Patria. Las acciones por conseguir su retorno se han convertido en un objetivo nacional que agrupa a hombres y mujeres de las más diversas opiniones políticas, ideológicas o religiosas y une, en definitiva, a los chilenos de dentro y de fuera.

En esta causa, como en otras, la Iglesia ha hecho y hace un considerable aporte.

En la generación de esta nueva realidad han jugado un papel fundamental los Partidos de la Unidad Popular.

La creciente y generalizada oposición del PDC a la tiranía ha contribuido, a su vez, a fortalecer este proceso.

Continuar trabajando sin reserva, dejando de lado todo propósito sectario o subalterno por el desarrollo de este movimiento que nace desde abajo, que se apoya en las organizaciones existentes, que se esfuerza por la reconstrucción de aquellas destruidas por la dictadura, que crea formas orgánicas unitarias nuevas cuando se requieren, es la tarea en que estamos empeñados, buscando la acción común con todas las fuerzas democráticas para derrocar a la dictadura.

Los Partidos de la Unidad Popular estamos convencidos del valor de nuestro aporte a esta tarea y de la significación decisiva de nuestra coalición política. Nuestros Partidos representan las fuerzas y el pensamiento social más avanzado del país. El papel de los Partidos de la Unidad Popular y el Gobierno Popular cobran con el tiempo mayor relieve y la personalidad de Salvador Allende se une en nuestra historia a las figuras de Balmaceda, Recabarren, Pedro Aguirre Cerda y, en un pasado más remoto, a los nombres de los padres de la Patria.

Hemos analizado nuestros errores e insuficiencias y extraemos de ellos las lecciones debidas. La realidad chilena es hoy diferente. Hacemos todo por abrir paso a lo nuevo y, en primer lugar, a nuevas formas de unidad y de lucha que dejen atrás las reyertas entre las fuerzas democráticas que facilitaron el golpe fascista. Al estimular los combates unitarios contra el fascismo se hará posible superar las querellas adjetivas y se desarrollará fructíferamente el debate ante el pueblo de los proyectos políticos de cada cual.

Cada día que transcurre en nuestra Patria es una jornada más de lucha unitaria por el pan, el trabajo y la libertad.

Responder las interrogantes que se hace el pueblo

Los partidos políticos democráticos estamos impulsando resueltamente la lucha de masas contra la dictadura. El consenso alrededor de las tareas fundamentales que plantea la caída del fascismo, contribuiría poderosamente a hacer más efectiva esa lucha.

Por su parte, Pinochet especula, hasta ahora, con la falsedad de que a su caída sobrevendrá el caos.

Es nuestro deber común demostrar con hechos que existen fuerzas capaces de resolver responsablemente la crisis Nacional y de dirigir al país por una senda democrática renovada.

Por nuestra parte, expresamos nuestra disposición a llegar a acuerdos sobre las formas de la nueva institucionalidad democrática, la generación y control de todos los poderes del Estado, entre ellos el judicial, las transformaciones sociales y económicas, la definición de las áreas de propiedad que la ley hará respetar, las cuestiones relati-

vas a la democratización de las Fuerzas Armadas, de los medios de comunicación de masas y la incorporación del pueblo a todos los órganos del Estado. Para alcanzar acuerdos sobre estas materias actuaremos con flexibilidad y amplitud a condición de que se garantice la completa erradicación del fascismo de la sociedad chilena.

Estamos por un Gobierno Provisional Democrático

Las fuerzas políticas y todos los sectores democráticos que contribuyan al derrocamiento de la dictadura deben constituir un Gobierno Provisional de coalición antifascista que dirija al país en el período de transición hacia una nueva institucionalidad.

Sólo un gobierno ampliamente representativo es garantía de la estabilidad que el país reclama.

Las tareas primordiales del Gobierno Provisional estarán determinadas por la necesidad de erradicar plenamente el fascismo, culminar la democratización del país y resolver la aguda crisis económica que sufren los chilenos.

Sus primeras medidas deberán estar destinadas al restablecimiento de todos los derechos humanos y libertades políticas y sindicales, con la sola proscripción de las organizaciones y las actividades fascistas de cualquier tipo. Forma parte inseparable de estas medidas el esclarecimiento total de la situación de los prisioneros políticos desaparecidos.

La democratización del país impone la disolución inmediata de las instituciones represivas que ha creado el Estado fascista, la investigación y el castigo a los cabecillas del golpe y a los responsables de asesinatos y torturas, por tribunales de derecho cuya independencia esté plenamente asegurada. Al plantear la necesidad del enjuiciamiento no nos anima ningún sentimiento de venganza sino el afán de justicia. Ni siquiera todos los mandos superiores, por el hecho de ser tales, son en nuestra opinión sujetos de juicio, porque hay responsabilidades diferentes y porque no sólo pesa la conducta de ayer, sino también la de hoy y de mañana.

El Gobierno Provisional deberá llevar a cabo un plan económico de emergencia que considere medidas urgentes para resolver los problemas más agudos de las masas asalariadas, de los pobres, de las capas medias y de los sectores empresariales afectados por la política de la dictadura, que reactivan la economía nacional. Deberá reemplazar el modelo económico impuesto por el fascismo y diseñar una concepción de desarrollo independiente, armónico y autosustentado que libere al país del dominio de los grupos monopólicos y del imperialismo.

Un gobierno sustentado en la soberanía del pueblo requiere contar con Fuerzas Armadas ajenas al fascismo y profundamente ligadas a las aspiraciones de la mayoría de la nación. Ello implica la democratización de sus estructuras, fundamentada en la formulación de una nueva concepción de la seguridad y la defensa nacional. Así podrán establecerse relaciones entre el pueblo y las Fuerzas Armadas que creen con

diciones para que la defensa de la integridad nacional sea una tarea que comprometa a todos los chilenos.

A nadie puede caber duda que las tareas que proponemos al pueblo de Chile y al conjunto de las fuerzas democráticas son urgentes y necesarias y constituyen un terreno posible de acuerdos entre todos los que combaten a Pinochet y al fascismo. La Unidad Popular las levanta como su bandera y llama a todos los chilenos a luchar por convertirlas en realidad.

Estamos ciertos que el camino para concretar esta propuesta no estará exento de dificultades. Convencidos que esta es la única salida real, lucharemos por ella de modo permanente, cualesquiera que sean las alternativas con que, al margen de nuestra voluntad, se desenvuelva la crisis del fascismo. Si se produjesen cambios en la estructura de poder, definiremos nuestra conducta concreta, en función de esos criterios, pugnando siempre, a través de la lucha de masas, por crear las condiciones para la instalación de un gobierno que exprese a las mayorías nacionales.

Las nuevas condiciones democráticas que se abrirán con la derrota del fascismo, permitirán un amplio debate acerca del camino futuro de Chile. La UP está convencida que sólo el socialismo podrá resolver sus problemas históricos. Lucharemos porque se sea en definitiva el camino que haga suyo la mayoría de los chilenos.

Con el esfuerzo de su pueblo y la contribución inmensa de la solidaridad internacional, Chile derrotará al fascismo.

Nuestra Patria conocerá una nueva vida.

Roma, 17 de marzo de 1978

Los Jefes de los Partidos de la Unidad Popular hemos considerado con profunda y patriótica inquietud la difícil situación que la Junta Militar fascista ha creado a Chile en materia de seguridad nacional, situación que ha llegado a comprometer la soberanía territorial de nuestra Patria.

Nuestros Partidos siempre han definido su política internacional colocando por encima de cualquier otra consideración los intereses superiores de nuestro pueblo, en armonía con la causa de la hermandad latinoamericana y de la paz mundial. En tal perspectiva dimos respaldo en el pasado a gobiernos que en estas materias tuvieron una posición correcta, no obstante las profundas divergencias que nos separaban de ellos en otros asuntos.

Durante el Gobierno de Salvador Allende, Chile aplicó una política de seguridad nacional que vinculó estrechamente los problemas propios de la defensa del país, con los objetivos de independencia, control efectivo de nuestras riquezas fundamentales, atención de las necesidades populares y búsqueda de la amistad con todas las naciones. Gracias a ello, pudimos mantener relaciones cordiales con nuestros vecinos y obtener respeto y comprensión para nuestro país en todo el mundo.

La inquietante situación actual es, ante todo, el resultado del repudio que provoca en el mundo entero la Junta Militar. Esta, con su política ha vulnerado las bases esenciales de nuestra seguridad. Pinochet ha conducido las relaciones internacionales del país de fracaso en fracaso.

La total frustración en que han culminado las negociaciones con Bolivia para abordar el problema de su mediterraneidad, ha provocado en el pueblo hermano una explicable desilusión. A fin de cuentas se ha creado un clima que dificulta una salida definitiva y justa a esa cuestión, la que el pueblo chileno y, en particular, la Unidad Popular, desean fervientemente alcanzar. Aún más, la manera equivocada en que se llevaron a cabo estas negociaciones ha generado, por su parte, recelos en Perú, que nada aconsejaba despertar, habida la necesidad de mantener las mejores relaciones fraternales con ese país vecino.

La gestión de la Junta de nuestros asuntos limítrofes con Argentina ha llevado recientemente a que aparezca cuestionado el fallo que Chile obtuvo del Tribunal Internacional Arbitral, accediendo a su demanda de reconocimiento de nuestra soberanía sobre las islas situadas inmediatamente al sur del Canal Beagle.

En su afán de imponer al país a cualquier precio un modelo concentrador y dependiente que nos lleve a una inserción neocolonial en el mercado internacional, la Junta no ha vacilado en retirar al país del Pacto de Integración Andina, limitando gravemente las posibilidades de un desarrollo autosustentado y democrático de la economía nacional, en armónica complementación con el resto de las naciones andinas que enfrentan problemas similares a los nuestros para sostener un desenvolvimiento económico independiente y progresista. Ello

es parte de una política de desnacionalización creciente de nuestra economía y desmantelamiento de numerosas empresas y organismos estatales, que eran el resultado de largos años de esfuerzo. Esto ha venido a comprometer aún más el futuro de Chile, convirtiéndose en otro factor que atenta contra una verdadera seguridad nacional.

El diseño de toda la política internacional del régimen de Pinochet refleja una percepción perturbada de las tendencias y realidades que se expresan en el mundo de hoy en favor del progreso y la convivencia pacífica. Mientras se mantienen relaciones estrechas con los regímenes más oprobiosos y repudiados por la comunidad civilizada, tales como los gobiernos racistas de Sudáfrica y Rhodesia; las inhumanas dictaduras de Corea del Sur, Haití y Nicaragua y otros regímenes militares del cono sur, se desarrolla una constante actitud de agresión y desprecio a los países socialistas y a numerosas naciones emergentes de Asia y Africa, que se han incorporado a la vida internacional en los últimos años y que han gestado una vigorosa organización en el movimiento de países No Alineados.

Este cuadro se completa con una posición de permanente ataque y provocación a las Naciones Unidas, a sus organismos técnicos y especializados y a sus autoridades. Tal conducta envuelve grandes riesgos para nuestro país, porque esta entidad no sólo constituye la más alta y constructiva expresión de la comunidad internacional, sino que regula y organiza todas las instancias de negociación y resolución de cualquier conflicto o litigio que hoy se plantee entre las naciones.

El balance descrito demuestra que el grave aislamiento internacional que hoy padece Chile es resultado directo de la política de la dictadura y de sus errores y desaciertos. Por mucho que Pinochet se empeñe en explicar las resoluciones de condena de los organismos internacionales como el resultado de una supuesta conjura contra su gobierno, todos los chilenos saben que esta es la consecuencia ante todo de la violación permanente de todos los derechos humanos en nuestra Patria. Han sido estas prácticas, tan ajenas a nuestra tradición nacional, las que han fundamentado los últimos pronunciamientos de la Asamblea General de la ONU y de su Comisión de Derechos Humanos. Así, ha quedado de manifiesto que 99 países y gobiernos ven a Chile como una nación que hoy no guía su conducta por los principios internacionales reconocidos. Esto termina por conformar una situación de extrema debilidad y deterioro de nuestra seguridad exterior.

Es en este sentido que la recuperación del prestigio de Chile como nación se vincula directamente con el derrocamiento de la Junta Militar.

En relación a los problemas más apremiantes que Chile enfrenta hoy en el orden internacional, queremos expresar nuestra certidumbre de que la voluntad de nuestro pueblo como la de los de Argentina, Bolivia y Perú se manifiesta en favor de la amistad y de la paz, se opone al chauvinismo de los elementos y tendencias más reaccionarios y se inspira en los principios de fraternidad y unidad latinoamericanas.

Nuestros pueblos están, también, alertas y rechazan la intromisión de intereses foráneos en nuestras relaciones que, como en el caso del Beagle, buscan apropiarse de las riquezas que allí existen y ganar posiciones de dominio. Deseamos subrayar también nuestra posición favorable al arreglo pacífico de los problemas en cuestión. En el caso particular del diferendo con Argentina, consideramos que la mejor vía para resolverlo es recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dentro del sistema de Naciones Unidas y tal como lo establece el procedimiento acordado entre Chile y Argentina en 1972, durante el Gobierno del Presidente Allende. Nunca hemos sido contrarios a las negociaciones bilaterales. Fue precisamente a través de ellas que se logró establecer el procedimiento arbitral vigente. Pero consideramos que no es precisamente Pinochet el más idóneo para conducir tal tipo de negociaciones, principalmente por su torpeza en el manejo de las relaciones diplomáticas, y porque su política ha llevado a Chile a la extrema situación de debilidad y aislamiento en que hoy se encuentra.

Los Jefes de los Partidos de la Unidad Popular que suscribimos llamamos patrióticamente y responsablemente la atención al pueblo chileno y a los componentes de las Fuerzas Armadas sobre estos problemas y sus proyecciones. Estamos convencidos que sólo un gobierno democrático que sea el resultado de la voluntad de nuestro pueblo y que se empeñe en la defensa de nuestra independencia, de nuestras riquezas fundamentales, de nuestra soberanía e integridad territorial y que impulse una política de paz y amistad con todos los pueblos del mundo, será capaz de alcanzar para Chile una auténtica y firme seguridad nacional.

Roma, 17 de marzo de 1978

Más de dos mil quinientos patriotas chilenos continúan desaparecidos. Entre ellos están algunas de las figuras más destacadas del movimiento popular. Los nombres de Víctor Díaz, Exequiel Ponce, Mario Zamorano, Carlos Lorca, José Weibel, Ricardo Lagos, Edgardo Enríquez, hoy conocidos en todo el mundo, encabezan una larga lista de luchadores antifascistas, prisioneros de la dictadura, cuyo paradero hasta ahora no se conoce.

Sus familiares han hecho todo lo humanamente posible por encontrarlos. Sus continuas demandas no han recibido respuesta por parte de la dictadura. Por el contrario, han sido recibidas con el silencio, la mentira, las tramitaciones e, incluso, los insultos de Pinochet y sus cómplices. Pero su heroica lucha, dramatizada el año pasado por dos huelgas de hambre, ha hallado respaldo amplio en Chile y en el mundo entero. Encontrar a los desaparecidos ha pasado a ser uno de los objetivos fundamentales de todos los que luchan en Chile por los derechos humanos. Los sindicatos, la Iglesia Católica, los profesionales e intelectuales, han levantado su voz para exigir de Pinochet una respuesta que, sin embargo, aún no llega.

A ello se ha unido la condena y la exigencia de pueblos, gobiernos y organizaciones internacionales en todo el mundo. La resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobada en los días pasados por 24 votos contra 3, que ratifica lo ya obrado por la Asamblea General en diciembre, al exigir "que las autoridades chilenas den razón inmediatamente de la suerte de muchas personas que han desaparecido en Chile", es la más reciente demostración de que los intentos de Pinochet por ocultar o minimizar el drama y por desafiar a la comunidad internacional, no han tenido ningún efecto.

Otros compatriotas han desaparecido en los últimos meses. Los casos recientes de Hernán Santos Pérez Alvarez y de Jenny Barra Rosales demuestran que, a pesar de la presión interna e internacional, Pinochet persevera en su política criminal.

Salvar la vida de los desaparecidos y lograr su libertad sigue, pues, siendo un objetivo fundamental del movimiento popular chileno. La Unidad Popular se compromete a continuar a toda costa sus esfuerzos por lograrlo. Es esta una lucha que no puede cesar ni disminuir en ninguna circunstancia.

Sabemos que, por encima de sus posiciones políticas, el drama de los desaparecidos conmueve, por sus características humanas y morales, a la inmensa mayoría de los chilenos y que empeña, además, la solidaridad efectiva del mundo entero.

Más allá de cualquier consideración, nuestra tarea sólo tendrá fin cuando todos y cada uno de ellos hayan sido ubicados y cuando los responsables del dolor y la tragedia de tantos hogares chilenos hayan dado cuenta a la justicia de sus crímenes.

COMITE POLITICO
DE LA UNIDAD POPULAR

Roma, 17-3-78

En las últimas semanas, la opinión pública internacional conoció un conjunto de nuevos antecedentes respecto al asesinato de ORLANDO LETELIER, perpetrado en Septiembre de 1976.

La responsabilidad de Pinochet y los fascistas que conforman su camarilla en este crimen no está puesta en duda. Lo que impresiona a muchos es la compleja trama urdida para eliminar al diplomático y patriota chileno; los estrechos lazos entre la DINA, el grupo para-militar "Patria y Libertad" y hampones internacionales; la desvergonzada utilización de la Cancillería de nuestro país y el desprecio de los fascistas chilenos por el respeto a la soberanía de otras naciones.

Los tribunales y el gobierno norteamericano solicitaron a la Junta que permitiera interrogar en Chile a dos sujetos, Juan Williams Rose y Alejandro Romeral Jara, acusados de haber participado en el asesinato de Letelier y su secretaria, la ciudadana norteamericana Bonnie Moffit. Se estableció más tarde que en realidad se trata del agente de la CIA y militante de "Patria y Libertad", Michael Vernon Townley Elche, y del Capitán del Ejército de Chile, Armando Fernández Lamas, este último tristemente célebre por sus actuaciones directas en la operación de asalto a La Moneda, el día del golpe. Ambos viajaron con identidad falsa a cometer el crimen cobalados con contrarrevolucionarios cubanos pagados por los fascistas chilenos. Hicieron uso de pasaportes oficiales proporcionados por Pinochet. De este modo, se pretendía encubrir su acción y dejar en la impunidad a sus mandantes y autores intelectuales del hecho.

La nueva evidencia desató el desconcierto en las filas fascistas. Pinochet, el General Contreras y los demás delincuentes involucrados, han maniobrado para tender una cortina de humo frente a estos hechos. Con tal objeto no vacilaron en liquidar al funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores responsable de haber proporcionado la documentación de viaje. La viuda del mismo, declaró recientemente que en las últimas horas de su vida estuvo en su casa con el ex-jefe de la DINA, el General Contreras. Se lo ha hecho aparecer como suicidado en octubre del año pasado, mientras, de los implicados por las investigaciones y la justicia estadounidense nada se sabe y no se toman medidas para hacer posible su interrogatorio.

El recuerdo de otros delitos similares, como el asesinato del General Prats y su esposa y el atentado a Bernardo Leighton y su señora, también en el extranjero, están frescos en la memoria. El movimiento de solidaridad con la lucha de nuestro pueblo no cesará en su vigilancia activa y denuncia de lo ocurrido.

La Unidad Popular de Chile llama a la opinión pública internacional a mantenerse movilizada para exigir que la investigación se desarrolle hasta sus últimas consecuencias y los culpables sean plenamente individualizados y castigados. Así lo reclama el pueblo de Chile, la conciencia de la humanidad y la memoria de los patriotas caídos.

COMITE POLITICO
DE LA UNIDAD POPULAR

Roma, Marzo de 1978